

primer juez suplente de Distrito en la persona del C. Lic. Rafael Casco en Setiembre y Noviembre de 1870, no ha lugar á que la federacion le pague los ochenta y cuatro pesos sobre que versa esta denuncia y que le reclama con el carácter de honorarios devengados.

Segundo; sáquese copia de esta sentencia, y remítase para su publicacion á los editores del Semanario Judicial como está mandado. Notifíquese. Así definitivamente juzgando lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Lázaro María Limon, juez de Distrito en este Estado por ante mí. Doy fé.—*Lic. Lázaro M^{re} Limon.—V. Mariano Paredes.*

AMPARO.

Juicio promovido en el juzgado de Distrito de Salisco por el C. Remigio Carrillo, contra una pruridencia del gobernador del Estado que vulnera las garantías constitucionales que aseguran los artículos 7 y 31 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Sr Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice:

En la respuesta de 4 del actual creyó, el que habla, haber demostrado que no procede el amparo de garantías individuales solicitado por el C. Remigio Carrillo, por no haber cometido el C. gobernador ningun atentado en la multa de trescientos pesos que le impuso, por haberse publicado en su imprenta un escrito contra el C. gefe político de esta ciudad, sin el nombre de su autor ó responsable de esa publicacion.

Entró en esa vez, el que suscribe, al fondo de la cuestion, aun contra la opinion de ese juzgado, manifestada en algunos otros negocios, porque cree, que conforme á la

última parte del art. 5º y segun el art. 6º de la ley de 20 de Enero de 1869, para que el amparo proceda y haya lugar á la suspension inmediata de la ejecucion del acto que se reclama, son indispensables la concurrencia de estas dos condiciones esenciales: que el acto reclamado esté comprendido en alguna de las fracciones del artículo 1º de dicha ley; esto es, que en los negocios de la naturaleza del presente, haya violacion de alguna garantía individual; y que la suspension sea necesaria y urgente, porque verificado el acto que se reclama no admite reparacion posible el mal que produce.

Asentó el que responde, en su escrito del dia cuatro, que no habia habido atentado ni urgencia para la suspension de la ejecucion del acto reclamado; y en esta vez con mas espacio procurará demostrar esos dos puntos.

La ley de 4 de Febrero de 1868 se propone dos objetos: marcar límites racionales y convenientes á la libertad de imprenta; ó lo que es lo mismo, impedir los arranques perjudiciales de un espíritu estraviado; y por la calificacion del abuso que se haga de la libertad de imprenta por el franqueamiento de esos límites, que la ley reputa como delito, estableció tribunales populares.

Como si estas medidas precautorias no fueran bastantes, exigió por sus artículos 34 y 42, que todo impreso no científico, artístico ó literario, contenga forzosamente la firma de su autor: este precepto no envuelve mas que una fórmula que ha de observarse rigurosamente, y su infraccion no importa verdaderamente un abuso de la libertad de imprenta; porque el objeto de la ley en esa parte, no ha sido otro, que como lo expresaron los legisladores constituyentes en 13 de Enero de 1857, combatir el anónimo y engrandecer la mision del escritor público, obligándolo á revestirse del valor y entereza, cuyas cualidades han sido raras desgraciadamente en nuestro país.

Impresos habrá que nada tengan consuable; que por el contrario, produzcan un gran bien á la sociedad, y que por lo mismo, absurdo sería reunir un jurado: habia de declarar necesariamente, que no solo no habia delito que castigar, sino que sus autores merecian bien de la sociedad por el provecho que le daban sus producciones. Y sin embargo, en esos impresos en que no habia contravencion á la libertad de imprenta, habria una falta por no contener la firma de sus autores, corregible gubernativamente como lo manda el art. 42 de la citada ley.

Y no se diga que se comete un anacronismo exponiendo los motivos de la ley de 57 para aplicarlos á la de 68, porque esa calificacion no sería exacta, supuesto que los artículos 33 y 42 de aquella ley son literalmente iguales al 34 y 42 de la otra, y esta se acordó casi sin discucion en el Congreso de 1868.

Es de tal manera exacto lo que se viene exponiendo, que penado el Sr. Carrillo por la falta que cometió publicando un impreso sin la firma de su autor, no queda con esa pena pecuniaria castigado el delito que se haya cometido por el mismo impreso; ni podría quedarlo, cuando la ley de 4 de Febrero no aceptó las penas pecuniarias para los delitos propiamente tales que se cometen contra la libertad de imprenta, porque el legislador las creyó contrarias al elemento democrático, como lo dice la comision del Congreso constituyente, redimir la culpabilidad con dinero, comprar la impunidad con la riqueza.

Si los delitos de imprenta propiamente dichos y la aplicacion de las penas propiamente tales no deben calificarse y castigarse, sino por la autoridad judicial, como lo manda el art. 21 de la Constitucion, y la ley de 4 de Febrero de 1868 no aceptó las penas pecuniarias para la reprension de los delitos de imprenta, es claro que el adverbio gubernativamente de que usa en su art. 42, se refiere á las facultades que comete

á la autoridad política para reparar las faltas de que él se ocupa.

Ha dicho el que habla, y tiene que repetirle ahora, que la palabra gubernativamente en su acepcion propia, quiere decir, por vía de gobierno, y por lo tanto la facultad que con ella se dá, se refiere al poder administrativo, para que obre conforme á la naturaleza del poder público que desempeña; esto es, con accion pronta, indivisible, única y uniforme.

Como no consta que el legislador haya querido hacer uso de esa palabra bajo otra significacion, ni puede dársele distinta de la que le ha fijado la academia de la lengua, no hay motivo racional para creer que la facultad contenida en el art. 42 se confiere á los jurados y no á las autoridades políticas.

La correccion impuesta al Sr. Carrillo, era anticonstitucional en uno de sus extremos, porque administrativamente, conforme al art. 21 de la Constitucion, no se puede imponer penas de prision que excedan de un mes; pero como el mismo interesado se encargó de expurgar el acto del gobierno de la parte atentatoria que contenia, optando por el extremo pecuniario, dejó de haber atentado, y el amparo que pide carece de fundamento legal.

Exigida la multa por parte del gobierno del Estado, aun cuando fuese con grave perjuicio de los intereses del Sr. Carrillo, si los tribunales le llegaban á impartir el auxilio y proteccion que pide, aquellos perjuicios le serian fácil y debidamente reparados, por no consistir mas que en valores que pueden reducirse á moneda.

En atencion á todo lo expuesto, el promotor concluye pidiendo que:

Primero; se revoque el auto de cinco del actual.

Segundo; que se declare que la justicia de la Union no ampara ni protege al C. Remigio Carrillo contra el acto del C. gobernador del Estado, por el cual le impuso trescientos pesos de multa por haber publi-

cado en su imprenta un papel sin la firma de su autor, por no haber cometido dicho funcionario ningún atentado, supuesto que obró en la esfera de sus atribuciones legales.

Guadalajara, Agosto diez de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*Juan Robles Martínez.*»

Sentencia del Juez de Distrito.

Guadalajara, Agosto veintidos de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos: El C. Remigio Carrillo entabló ante este juzgado juicio de amparo y protección de garantías contra el C. gobernador del Estado, por haber violado en su contra la que otorga el art. 21 de la Constitución general, imponiéndole la pena disyuntiva de seis meses de prisión ó trescientos pesos de multa; solicitó además la suspensión del acto reclamado.

Pedido informe al C. gobernador del Estado, lo evacuó manifestando, que en efecto impuso al C. Carrillo la pena de que se queja, en uso de la facultad que concede el art. 42 de la ley orgánica constitucional de 4 de Febrero de 1868; pena á que se hizo acreedor el quejoso, por haber publicado un impreso sin la firma de su autor.

Este juzgado, en atención á que el C. Carrillo apoyó su pretensión en los artículos 20 y 21 de la Constitución y en la fracción 1ª del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y además, por constarle que si bien el C. Carrillo aceptó la multa acaso no se la pudo proporcionar y se encontraba en prisión; y como la falta de libertad produce daños irreparables, se decretó la suspensión del acto reclamado, con fundamento del art. 6º de la citada ley de 20 de Enero.

Pedido nuevo informe al C. gobernador, como lo dispone el art. 9º de la repetida ley de 20 de Enero, lo evacuó remitiéndose al primero y solo emitiendo su opinión

sobre que la providencia suspensiva era improcedente.

Este juzgado, considerando:

Primero; que la parte final del art. 7º de la Constitución general de 1857 dice: "Los delitos de imprenta serán juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y designe la pena." y el delito cometido por el C. Carrillo, es de imprenta.

Segundo; que el art. 21 de la Constitución consigna que: "La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial, y que la política ó administrativa solo podrá imponer como corrección, hasta quinientos pesos de multa, ó hasta un mes de reclusión, en los casos y modo expresamente determinados por la ley."

Tercero; que la pena disyuntiva aplicada al C. Carrillo de seis meses de prisión ó trescientos pesos de multa, impuesta por el C. gobernador, es con infracción del art. 21 citado.

Cuarto; que el art. 41 de la ley orgánica de imprenta, previene que: "Ninguna otra autoridad, fuera de las señaladas en esta ley, puede intervenir en asuntos de imprenta y librería."

Quinto; que el art. 42 de la misma ley, no puede tenerse como aclaratorio del anterior, supuesto que nada aclara al decir que los delitos de que habla ese art. y el 34, sean castigados gubernativamente, y

Sesto; que aun suponiendo que dicho art. 42 consignara de un modo expreso, que los gobernadores y demás autoridades políticas castigarán los delitos de que habla, con la pena que designa; tal art. no debía tener aplicación práctica, por pugnar con los artículos 7 y 21 de la Constitución federal, suprema ley de la nación. Por tales consideraciones, este juzgado falla con las proposiciones siguientes:

Primera; La justicia de la Unión ampara y protege al C. Remigio Carrillo, por la pena que gubernativamente le impuso

el C. gobernador del Estado, multándolo en trescientos pesos ó seis meses de prision, pues que tal providencia vulnera las garantías constitucionales consignadas en los artículos 7 y 21 de la carta fundamental de la República.

Segunda; Hágase saber al C. Carrillo que este juzgado desaprueba, el que al hacer uso de su derecho en su último alegato, al ocuparse de los CC. gobernador del Estado y promotor fiscal de la federación, lo hace faltando al respeto y consideración que se debe á las autoridades y funcionarios públicos que demanda la urbanidad y que previenen las leyes.

Tercera; Notifíquese esta sentencia, publíquese en los periódicos y remítase este expediente á la Suprema Corte de Justicia para los fines de la ley.

El C. juez de Distrito lo decretó y firmó.—*D. I. Trejo.*—*G. J. Gallegos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre once de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en 1º de Agosto último promovió ante el juez de Distrito de Guadalajara el C. Remigio Carrillo contra la providencia del gobernador del Estado, que lo condenó á seis meses de prision ó trescientos pesos de multa, por haber salido de la imprenta del promovente, á la luz pública, un escrito contra el gofe político de dicha ciudad sin el nombre de su autor ó responsable, cuya providencia, alega el C. Carrillo, que viola en su persona las garantías que otorgan los artículos 20 y 21 de la Constitución de la República. Vistos los informes del gobernador responsable; los pedimentos del promotor fiscal; el alegato del quejoso y la sentencia del juez de Distrito con todo lo demás que ver convino.

Considerando: que conforme al art. 41

de la ley orgánica de la libertad de la prensa, fecha 4 de Febrero de 1868, ninguna autoridad, fuera de las señaladas en la misma ley, puede intervenir en asuntos de imprenta y librería; que las autoridades señaladas en esta ley son los ayuntamientos y los jurados; que la pena impuesta al C. Carrillo no lo fué por ninguna de esas autoridades, sino por una extraña cual es el gobernador del Estado; y que aun en el supuesto de haber sido impuesta por autoridad legítima, se hallaría, en cuanto á la prision, fuera de los términos que prescribe el art. 21 de la Constitución federal, que solo permite á las autoridades administrativas imponer hasta un mes de reclusion en los casos y modos que expresamente determina la ley; resultando por tanto, violadas en la persona del quejoso las garantías individuales que invoca. Con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez de Distrito de Guadalajara, pronunciada en 22 de Agosto de este año, que declara: "que la justicia de la Union ampara y protege al C. Remigio Carrillo por la pena que gubernativamente lo impuso el C. gobernador del Estado, de multa de trescientos pesos ó seis meses de prision, pues que tal providencia vulnera las garantías constitucionales consignadas en los artículos 7º y 21 de la carta fundamental de la República.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Aza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M.*

Zavala.—José García Ramírez.—Luis M^a Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Setiembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—Lic. *Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el C. Teófilo Delgadillo, contra la orden del C. jefe político de esa capital, por la cual fué reducido á prision y remitido por cordillera al C. jefe político del Fresnillo que lo reclamó, pues con tal orden dice el quejoso, se violan en su persona las garantías que conceden los artículos 16 y 18 de la Constitución federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal, alegando para definitiva en el juicio de amparo y protección promovido por el C. Teófilo Delgadillo contra el auto de la gefatura política de este partido que mandó aprehenderlo y ponerlo bajo el cuidado de una escolta de seguridad pública para conducirlo á disposición del C. jefe político del Fresnillo, como mejor proceda expone: que así del informe sobre lo principal de la queja, rendido por el funcionario ejecutor de dicho acto; del contenido del que rindió el C. jefe político del Fresnillo, sobre la naturaleza de las faltas porque se había requerido la aprehensión y remisión del quejoso, y de los documentos y demás pruebas aducidas por este en el término legal como justificativas de su solicitud de amparo, aparecen plenamente probados y corroborados los hechos que motivaron la queja del C. Delgadillo y la petición hecha por el que suscribe en 4 del que rige.

Efectivamente, de los documentos exhi-

bidos por el quejoso en el término de prueba, aparecen: que habiendo el C. jefe político de Fresnillo, librado en 17 de Junio último orden á Delgadillo, dirigida á Villa de Cós, para que tomara posesión del cargo de presidente municipal de la misma, que le había sido conferido popularmente en las últimas elecciones, y bajo el concepto de que debía tener ya la credencial respectiva, la contestó desde esta ciudad, así como el oficio de 19 del mismo mes del presidente interino de Cós, en que le trascribió la del 15, de aquella gefatura, relativa á expresar, que ignorando la vuelta del C. Delgadillo, hasta esa fecha se libraba la orden para que se encargase del mando de la municipalidad; y que igualmente, desde esta ciudad dió también respuesta á los oficios de 22 de Junio de la gefatura de Fresnillo y 29 del mismo de la presidencia de Cós, relativos, el primero, á que no habiendo contestado la orden del día 17, se le exhibía para que recibiera la presidencia de Cós, é informara con justificación del impedimento porque no lo había hecho; y el segundo, transcribiendo á esta ciudad á Delgadillo, otra de la gefatura de aquel partido, en que previene que por el conducto mas inmediato se le remitiera el referido oficio de 22 de Junio.

Y de estos precedentes, así como de la prueba relativa á que el domicilio y vecindad del quejoso es esta ciudad, de donde resulta justificado el motivo por el que no pudo recibir en Villa de Cós las órdenes referidas de la gefatura política de Fresnillo, á la vez que de las notas puestas en los documentos que originales obran como pruebas, aparecen contestadas oportunamente las órdenes de la gefatura de Fresnillo, y los oficios de la presidencia de Cós, para patentizar que ni aun esta falta existe para fundar la orden de 23 de Julio.

Mas dando por sentado que el quejoso no hubiera contestado con oportunidad las órdenes y oficios de las autoridades expresadas, ésta falta y la de desobedecimiento